



P

ara México y para el humanismo político no hay contradicción entre un Estado liberal, republicano, laico, igualitario en derechos y obligaciones, y la existencia de comunidades definidas por raza, religión, lengua, cultura o región. No hace falta excluir entre una comunidad adscrita y una sociedad libremente elegida.

Dicho de otro modo, se puede ser mexicano y al tiempo ser ateo, católico, rarámuri, mestizo o judío, en un territorio diverso como lo es el nuestro desde California hasta Cozumel. Visto desde otro ángulo, podemos ser parte de cuantas comunidades queramos, de corte económico, político o cultural, siendo a la vez ciudadanos con idénticos derechos y obligaciones.

Más aún cuando en nuestro país alternan comunidades tradicionales con sociedades modernizadas. En México, el Estado no ha suplido, como en otros lares, todas las tareas culturales de las iglesias. Tampoco la industrialización ha llegado a todas las regiones de la República. En varias zonas del cuerno de la abundancia, la ruralidad se impone.

En México hemos contado históricamente con filosofías políticas que permiten la igualdad en la diferencia o, dicho de otra manera, la igualdad de la diferencia. Además, no tendría por qué ser de otro modo. De hecho, el fenómeno de una sociedad republicana que integra comunidades diversas se presenta de manera fehaciente en España, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Suiza, Canadá y los Estados Unidos.

El debate debería estar en otro lado, en cómo aprovechamos las diferencias culturales para promover la igualdad de oportunidades. Ante el éxito limitado del Estado omnisciente y del Mercado todopoderoso en el desarrollo humano y social en México, la sociedad tiene la palabra para expresarse en un espacio a partir del cual se puede edificar el bien común.

No se trata de ignorar al Estado ni al Mercado, hablamos de construir mercados y de fortalecer al Estado mediante el desarrollo de comunidades sociales y culturales fuertes, todas ellas en disfrute y reconocimiento de un mismo marco de leyes republicanas, es decir, de una sociedad civil unificada.

Luis Eduardo Ibáñez Hernández
Director de la FRPH